

■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

11

1980 y 1999. El documento afirma, y las pruebas estadísticas comprueban, que diferentes dimensiones de la integración económica se asociaban con ajustes al gasto en educación pública, atención a salud y protección social, influido esto, en parte, por el tipo de régimen político. Una mayor integración comercial conduce a más inversión en capital humano, especialmente en regímenes autoritarios, pero reduce gastos en la protección social.

La siguiente sección analiza las explicaciones teóricas del gasto social y examina los efectos hipotéticos de la globalización, así como el tipo de régimen político, sobre el gasto social en los países en desarrollo. Después, se describen los datos y se presentan los resultados de diversos modelos que abordan las preguntas planteadas. El artículo concluye con un análisis de las implicaciones metodológicas y sustantivas del documento y esboza futuros caminos de investigación.

GASTO EN EDUCACIÓN, SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN PAÍSES DE INGRESOS MEDIOS

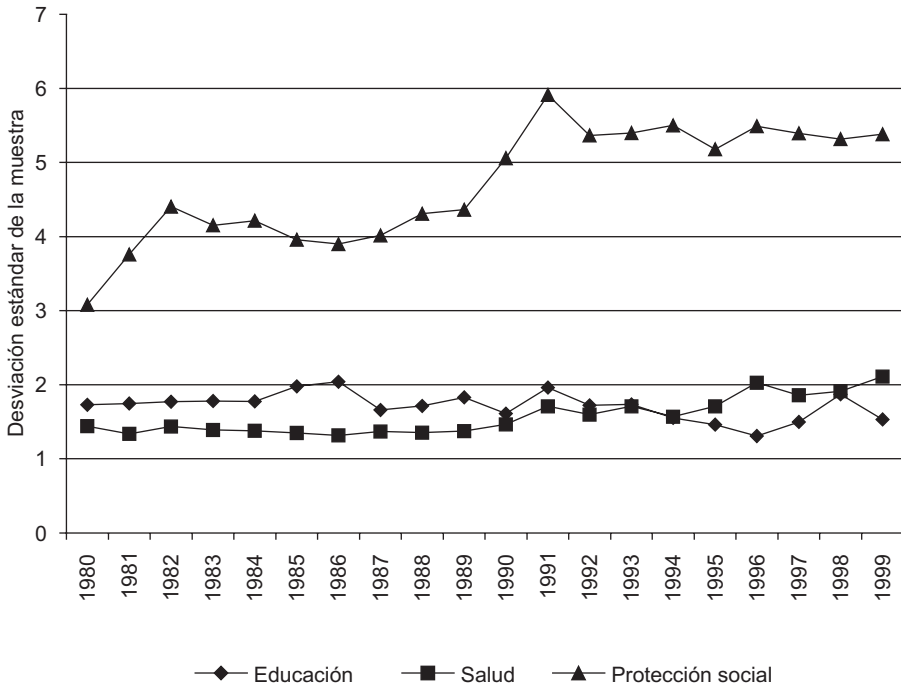
Probablemente las consecuencias internas de la globalización varían de un país a otro en distintos niveles y etapas del desarrollo económico. En un extremo, los países de ingresos altos tienen abundante capital y son sumamente industrializados o postindustriales. Las consecuencias distributivas de la liberalización comercial en dichos países deberían conducir a una mayor desigualdad del ingreso y demandas por más gasto social. A pesar de la apertura comercial, muchos países han resistido una competencia hacia menores niveles de gasto social, en parte, porque la dotación de factores permite a los países desarrollados mantener una ventaja competitiva en los mercados globales. En el otro extremo, los países de ingresos bajos a menudo tienen economías preindustriales o menos industrializadas, cuyos ingresos dependen de una abundante mano de obra no calificada y de la exportación de materia prima en la economía globalizada. La expansión del comercio ofrece, además de oportunidades para la expansión de exportaciones de productos que usan intensivamente mano de obra, promesas de crecimiento económico. La dotación inicial de factores de los países en desarrollo tiene consecuencias distributivas internas muy diferentes en el mo-

mento de la integración económica, comparadas con los efectos en los países sumamente desarrollados.

Entre esos dos extremos, los países de ingresos medios ocupan un importante terreno intermedio que debería ser analizado por separado. Un aspecto común de estos países es su posición en los mercados globales entre los países con altos y bajos ingresos y su etapa de desarrollo económico. Los países de ingresos medios aún no tienen abundante capital, pero han desarrollado su economía y esto los ubica en una posición importante en la economía global. Por ejemplo, la apertura comercial ofrece a los países de ingresos medios la oportunidad de competir con los países desarrollados al usar su abundante dotación de mano de obra, pero, al mismo tiempo, los países de ingresos medios enfrentan una creciente competencia de los países de bajos ingresos con abundante mano de obra que también están tratando de aprovechar la apertura comercial para expandir su ingreso por exportaciones.

Si bien la inversión extranjera directa (IED) en los países de ingresos medios no ha alcanzado los niveles de la IED entre los países de altos ingresos, poco a poco se está volviendo más importante. En los países de ingresos altos, la IED busca, en esencia, acercar la producción a los mercados y no capitalizar los diferentes precios y dotaciones de factores. El atractivo de los países de ingresos medios para la IED a menudo es una diferente dotación de mano de obra y costos más bajos de ésta. Si los países de ingresos medios quieren atraer la IED de los países de ingresos altos, deberían ser más sensibles a las necesidades del capital humano y a los costos de mano obra de las empresas extranjeras ahí donde los países de altos ingresos no lo son. De igual modo, en los mercados internacionales de capital, los países de ingresos medios ocupan una posición diferente que los países de altos ingresos y los de bajos ingresos. Ante la ausencia de los múltiples indicadores de calidad para la posición en el mercado global y las limitaciones existentes de los modelos multivariados, analizar los efectos de la globalización en la submuestra de la población de los países de ingresos medios proporciona la manera más razonable de evitar los problemas de la heterogeneidad causal que tendría un análisis global, pues supone que la globalización afecta a los países de todos los niveles de desarrollo económico de la misma

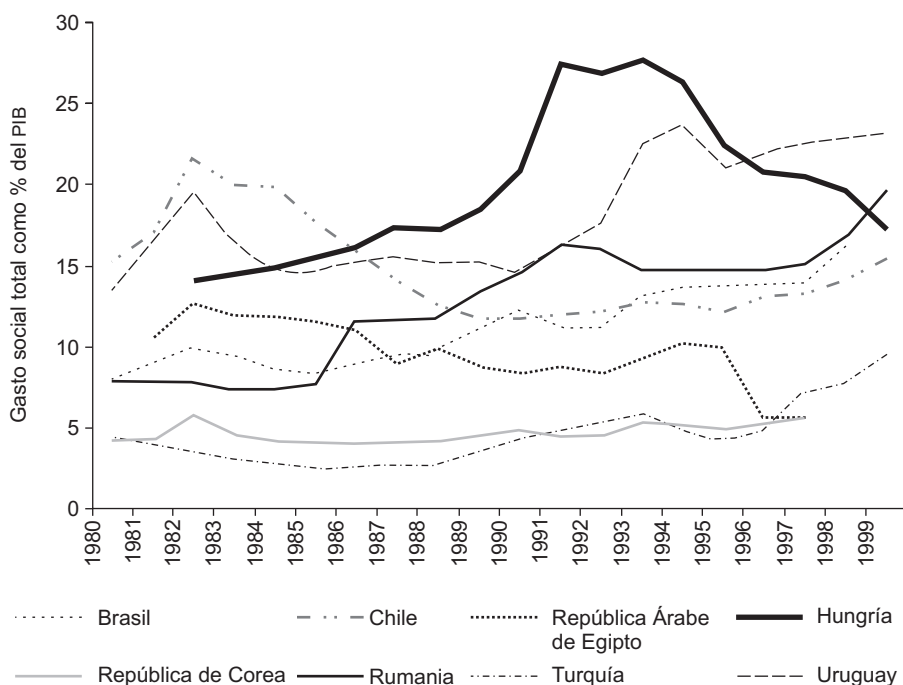
FIGURA 1. VARIACIONES EN EL GASTO SOCIAL DE PAÍSES DE INGRESOS MEDIOS, 1980-1999



manera. Además, si bien varios estudios han examinado los efectos de la liberalización económica en las democracias industrializadas avanzadas, pocos han examinado las consecuencias políticas de la liberalización económica en países con niveles inferiores de desarrollo económico.

Desde la década de 1980, algunos gobiernos de los países de ingresos medios han aumentado sus compromisos de gasto social, mientras que otros han recortado el gasto. La figura 1 describe la variación en los compromisos de gasto social de una muestra de países de ingresos medios para el periodo 1980-1999. La gráfica sugiere que existe poca variación entre estos países en cuanto a su gasto en educación pública y atención a la salud. Además, parece que

FIGURA 2. GASTO SOCIAL TOTAL EN UNA MUESTRA DE PAÍSES DE INGRESOS MEDIOS, 1980-1999



hay un pequeño cambio en la cantidad de variación en las décadas de 1980 y 1990, lo que sugiere que los países no han convergido ni divergido significativamente. En contraste, la desviación estándar en la muestra para el gasto en protección social parece haber aumentado en la década de 1990, lo que representa más variación entre los países de la muestra durante las décadas de 1990 y 1980. Además, en general, los compromisos de gasto en protección social parecen más variables que en educación pública y atención a la salud durante todo el periodo. Dicha variación ilustra la probabilidad de que los países de ingresos medios pueden tener modelos muy diferentes de bienestar social.

La variación en los compromisos de gasto también puede ilustrarse mediante una comparación de un subconjunto de países de la muestra. La figura 2 ilustra el patrón del gasto social total (la combinación de educación, salud y

protección social) de 1980-1999 para varios países de la muestra. En algunos países, como Brasil y Uruguay, el gasto creció a un ritmo constante durante el periodo. En otros, como Chile, el gasto era menor en 1999 que en 1980. La gráfica refleja la diversidad en los compromisos de gasto tanto en el nivel del gasto como en sus cambios durante este periodo de mayor integración económica. Este artículo sugiere que, si bien la integración económica crea condiciones de mercado parecidas para los estados, esta variación en el gasto social puede ser explicada, en parte, por las restricciones impuestas por el tipo de régimen político, pues esto evita un rápido ajuste a las condiciones del mercado integrado.

Si bien algunos estudios han tratado todos los programas sociales de los países de ingresos medios como una amplia categoría de gasto gubernamental (por ejemplo, Brown y Hunter, 1999), este artículo también sostiene que el gasto social, como una categoría amplia del gasto gubernamental, debería desagregarse lo más posible (véanse también Dion, 2000; Kaufman y Segura, 2001). El gasto social debería desagregarse, porque los gobiernos y los mercados pueden percibir el valor relativo de ciertos tipos de gasto de diferente manera. Por ejemplo, se considera en general que la educación y la atención a la salud son componentes importantes de la formación de capital humano. En particular, la educación es importante para promover un crecimiento económico de largo plazo (Barro, 1991). En el mismo sentido, el Banco Mundial reconoció a principios de la década de 1990 que la inversión en atención a la salud y tener trabajadores sanos es importante para la competitividad y el crecimiento económico (Banco Mundial, 1993; Nelson, 1999). Si bien el “consenso de Washington” hizo que los gobiernos de mercados emergentes, especialmente en América Latina, redujeran sus déficit fiscales, se consideró que el gasto en educación pública y en atención a la salud eran “los objetivos esenciales adecuados del gasto gubernamental” (Williamson [1990] 2000, p. 19). Por lo tanto, los gastos en educación y en atención a la salud de los países de ingresos medios son considerados como una inversión importante en capital humano, ya que pueden mejorar la competitividad en los mercados globales y promover el crecimiento y el desarrollo económico.

En contraste, suele considerarse que el gasto en protección social es un subsidio al consumo. La protección social incluye funciones de seguro como las jubilaciones y las pensiones de invalidez, seguro de enfermedad y de desempleo, pero también incluye subsidios al ingreso destinados a los pobres. Si bien en principio la protección social se basa en la noción de los derechos ciudadanos sociales (Marshall, 1950), el gasto en protección social normalmente es financiado en parte por contribuciones (o impuestos) del empleado y el patrón, incluso en países de ingresos medios. Estos impuestos al trabajo, si se vuelven demasiado exorbitantes, pueden convertirse en obstáculos para la competitividad económica. Aun cuando la protección social pretende mejorar los costos de los desplazamientos y ajustes de corto plazo en el mercado laboral, un gasto estatal extensivo en seguridad social puede ser ineficiente y una carga para el crecimiento económico. Por consiguiente, si bien en general se reconoce que los gastos en educación pública y en atención a la salud son gastos estatales apropiados y necesarios, es menos claro el grado en que el Estado debería proporcionar beneficios de protección social y transferencias de ingresos. Por estas razones, el gasto social en cuanto categoría de gasto debería desagregarse en sus partes componentes: educación, atención a la salud y protección social.

LOS EFECTOS DE LA GLOBALIZACIÓN SOBRE EL GASTO DE LOS PAÍSES DE INGRESOS MEDIOS

La globalización de las últimas tres décadas ha producido elevados niveles de apertura de las cuentas corriente y de capital. Dicha globalización ha alentado el desarrollo de dos grandes expectativas teóricas sobre los efectos de la globalización en el tamaño del Estado y los gastos del Estado en programas sociales. Varios autores sostienen que la integración en los mercados globales restringe el tamaño del Estado y los gastos estatales en programas sociales. Dichos argumentos predicen una convergencia del tamaño y del gasto de los estados a medida que se dirigen hacia el mínimo denominador y se preocupan por reducir la intervención estatal de la economía para mejorar la competitividad internacional (Friedman, 2000; véase también Strange, 1996).

Sin embargo, los estudios empíricos sugieren que la respuesta de las políticas públicas a la creciente globalización de los mercados no ha sido uniforme, en especial en las economías desarrolladas. En cambio, la mayor integración económica puede llevar a que el Estado y su gasto sean más grandes, mientras los gobiernos (especialmente en países pequeños y desarrollados) experimentan nuevas presiones para compensar a sus ciudadanos por los nuevos riesgos que enfrentan debido a la integración económica (Cameron, 1978; Katzenstein, 1985; Garrett, 2001). Además, cuando las instituciones corporativistas simpatizaron con la voz de la izquierda y fomentaron la mano de obra organizada, los gobiernos fueron capaces de resistir las presiones de reducir la protección social compensatoria (Garrett y Lange, 1991; Garrett, 1998; Rudra, 2002). Incluso en los países desarrollados, una mayor apertura comercial está asociada con un crecimiento en el gasto social total (Rodrik, 1998). La explicación teórica de dichos hallazgos es que los estados integrados en mercados globales deberían compensar a sus trabajadores por los desplazamientos y riesgos asociados con la apertura comercial. Sin embargo, al mismo tiempo, la rápida liberalización comercial y financiera de las últimas dos décadas ha producido un crecimiento más lento de los gastos sociales totales del Estado y del gasto social compensatorio (Garrett, 2001; Kaufman y Segura, 2001), lo que sugiere un límite superior del crecimiento del Estado en una economía abierta (Rodrik, 1997).

La mayoría de los estudios analizan ya sea el tamaño agregado del Estado, el consumo estatal, el gasto social total o el gasto en seguridad social (con excepciones de Dion, 2000; Kaufman y Segura, 2001). Como se afirmó en el análisis anterior sobre las diferencias entre el “gasto social” (educación, salud, protección social), no todo el gasto social es el mismo. De igual modo, diferentes tipos de integración económica deberían ejercer distintas presiones en cada tipo de gasto. En particular, el gasto en salud pública y en educación en países con niveles altos de integración comercial e inversión extranjera directa neta debería aumentar. Puesto que la salud pública y la educación son consideradas funciones legítimas del gobierno y se reconoce que promueven el crecimiento económico, los estados comerciales deberían mejorar su capital humano para mantener la competitividad. Por lo tanto, la apertura comercial debería pro-

porcionar un incentivo más para que los estados de ingresos medios mejoren el desempeño del gobierno en esta área, especialmente cuando comienzan a sentir mayor competencia de parte de las exportaciones de los países de bajos ingresos. Los estados de ingresos medios deberían actualizar sus habilidades para cambiar sus patrones hacia una producción intensiva en mano de obra semicalificada si esperan mantener su competitividad. El efecto positivo de la apertura comercial en el gasto en inversión humana, como educación y atención a la salud, ha sido uno de los pocos hallazgos coherentes de la literatura empírica (Rodrik, 1998; Dion, 2000; Kaufman y Segura, 2001).

En contraste, los gastos en protección social pueden dañar la competitividad de las exportaciones si los impuestos al trabajo son demasiado altos. Puesto que la mano de obra abunda en los países de ingresos medios, por lo general exportan bienes intensivos en mano de obra para los que tienen una ventaja comparativa, según el modelo Hecksher-Ohlin. En consecuencia, mantener costos bajos de mano de obra es particularmente importante para mantener una ventaja competitiva en las exportaciones. Además, muchos países de ingresos medios están comenzando a sentir la competencia de los salarios de los países de ingresos bajos, lo cual presiona aún más a los gobiernos para mantener salarios bajos. Si bien la integración comercial puede ocasionar desplazamientos en el mercado que generen demandas de beneficios de protección social (como el desempleo), a menos de que ya estén establecidas las instituciones de protección social, estos desplazamientos no se traducirán automáticamente en un mayor gasto. Aunque muchos países de ingresos medios tienen cierta forma de seguridad social (principalmente pensiones y compensación para los trabajadores), pocos tienen un seguro de desempleo que produzca un incremento automático del gasto a medida que ocurren los desplazamientos debidos a la integración comercial. Dadas las características de los mercados laborales y las instituciones de protección social en los países de ingresos medios, es probable que la integración social ejerza presión sobre los gobiernos para mantener los impuestos al salario y gastos bajos en protección social. En este sentido, varios estudios también han encontrado pruebas que sugieren que el gasto en protección social en América Latina es categóricamente distinto del gasto en educación

y salud (Dion, 2000; Kaufman y Segura, 2001). En cambio, es probable que las demandas del mercado fomenten que los países de ingresos medios con altos niveles de integración comercial inviertan más en educación pública y en atención a la salud, a fin de mantener su competitividad.

Pese a que la inversión extranjera directa refleja la apertura de la cuenta de capital, y no la apertura de la cuenta corriente, niveles elevados de IED en los países de ingresos medios deberían producir efectos parecidos en el gasto social que los de mayores niveles de integración comercial. Los inversionistas que ubican su producción o servicios en países de ingresos medios están buscando mano de obra barata que satisfaga sus necesidades mínimas de capital humano. Por consiguiente, cuando la IED se reubica en países de ingresos medios, los gobiernos deberían invertir más en capital humano y sentirse presionados por mantener bajos los costos de la mano de obra. La inversión extranjera directa debería llevar a un mayor gasto en educación pública y salud y a un gasto estable o reducido en protección social. Sin embargo, al mismo tiempo, los inversionistas extranjeros son sensibles al desempeño económico general y a los déficit gubernamentales (Mosley, 2000) y, por tanto, es probable que incluso el gasto en educación y salud tenga un techo superior. No obstante, al mismo tiempo la IED es aún mucho más común entre economías avanzadas y las tasas de inversión por lo general son más bajas en los mercados emergentes (Hirst y Thompson, 1999).

Finalmente, la apertura de la cuenta de capital ha llevado no sólo a una mayor inversión extranjera directa, sino a una mayor inversión en cartera de corto y largo plazo. En los países de ingresos medios, donde el capital es escaso, el capital de la inversión extranjera puede ser una fuente importante de financiamiento para el gobierno y el sector privado. Los inversionistas buscan oportunidades seguras de inversión y rendimientos rentables. A esos inversionistas les preocupan menos las habilidades específicas o el precio exacto de la mano de obra, y más el producto económico general de la economía y los grandes déficit fiscales que con mayor probabilidad determinarían las primas de la tasa de interés y el panorama de las ganancias (Mosley, 2000). La mayor apertura de la cuenta de capital y los flujos deberían restringir el gasto gubernamental.

Los gobiernos de las economías de ingresos medios, que dependen mucho del capital extranjero, tratarán de mantener bajo el gasto general y pequeños los déficit presupuestales. Altos grados de apertura de la cuenta de capital deberían producir gasto reducido en educación, salud y protección social, pues los gobiernos buscan reducir los déficit presupuestales.

En general, es probable que la globalización económica tenga diversos efectos según el tipo de integración y el tipo de gasto social. Es probable que un mayor comercio y una mayor inversión extranjera directa produzcan mayores niveles de inversión en educación pública y en atención a la salud, mientras que, al mismo tiempo, restringe los gastos en protección social. En contraste, es probable que la apertura general de la cuenta de capital aumente la preocupación del gobierno acerca de los déficit presupuestales y, por tanto, los gobiernos tratarán de gastar menos en todos los tipos de programas sociales. Sin embargo, hasta dónde ajustarán los gobiernos sus compromisos de gasto social para satisfacer las nuevas demandas de la integración económica estará determinado, en parte, por las instituciones políticas nacionales.

LAS LIMITACIONES DEL TIPO DE RÉGIMEN POLÍTICO EN LOS PAÍSES DE INGRESOS MEDIOS

A pesar de las razones teóricas de por qué la integración económica debería producir cambios en el gasto social en los países de ingresos medios, el tipo de régimen político también puede limitar la capacidad de los gobiernos para cambiar radicalmente sus compromisos de gasto social. La mayoría de los estudios existentes sobre globalización y gasto social se han enfocado en las democracias industrializadas avanzadas. Pocos estudios han abordado las diferencias potenciales en el gasto social entre los regímenes autoritarios y democráticos en el contexto de la globalización. Los estudios que han tratado este asunto han producido resultados mixtos (cf. Brown y Hunter, 1999; Hunter y Brown, 2000; Dion, 2000; Kaufman y Segura, 2001; y Rudra y Haggard, 2001). En teoría, existen dos maneras de tratar las diferencias entre los regímenes autoritarios y democráticos con respecto a la globalización y el gasto social.

En primer lugar, existe la teoría de que las democracias, en promedio, gastan más en políticas sociales que los regímenes autoritarios. La base teórica de este argumento señala los compromisos preferidos de gasto social del votante mediano de cada tipo de régimen. Puesto que la base de apoyo de los regímenes autoritarios suele ser más restringida que la de las democracias, el votante mediano de un régimen autoritario suele tener un ingreso mayor que el del votante mediano en una democracia. El votante mediano de un régimen autoritario preferirá una tasa de impuestos menor y un gasto redistributivo y social más bajo de parte del gobierno que el votante mediano de una democracia. En contraste, puesto que las democracias incorporan (en teoría) a todos los votantes, el ingreso del votante mediano de una democracia es inferior que en un régimen autoritario. Por consiguiente, el votante mediano en una democracia exigirá más gasto social y redistributivo por parte del Estado que el votante mediano en un régimen autoritario (Boix, 2003). Este argumento explica la lógica de afirmaciones que dicen que las democracias gastarán más en programas sociales como respuesta a las “demandas” de los votantes (Brown y Hunter, 1999). Los votantes en una democracia no sólo tienen instituciones formales para expresar sus demandas de gasto social, sino que el votante mediano expresará una preferencia por más gasto que el seguidor promedio de un régimen autoritario, debido a su naturaleza excluyente (Boix, 2003). En promedio, las democracias deberían gastar más en educación pública, atención a la salud y protección social que los regímenes autoritarios.

En segundo lugar, los regímenes democráticos y autoritarios pueden analizarse, no sólo en términos de sus votantes medianos, sino también en términos de instituciones políticas y el número de los jugadores con poder de veto. Si bien los regímenes autoritarios rara vez son actores unitarios, las democracias suelen tener instituciones políticas y jugadores con poder de veto más limitantes que los regímenes autoritarios (Tsebelis, 2002, cap. 3). Los regímenes autoritarios pueden tener muchos jugadores con poder de veto, especialmente si la autoridad es compartida entre oficiales de diferentes ramas militares o de una junta formal (Remmer, 1989; Biglasier, 2002; Tsebelis, 2002). Por desgracia, debido a la naturaleza de esos regímenes, rara vez hay datos suficientes so-

bre la toma de decisiones y las preferencias de los jugadores con poder de veto en el régimen. Sin embargo, parece seguro afirmar que, en promedio, la toma de decisiones estará menos limitada en un régimen autoritario por los jugadores con poder de veto que en un régimen democrático. Por ejemplo, aun cuando la toma de decisiones se comparte entre los altos funcionarios de las tres ramas de las fuerzas armadas, es probable que las preferencias de esos tres oficiales en cuanto a políticas públicas (dados sus antecedentes en cuanto a educación, ingreso y carrera) sean más parecidas que las preferencias de políticas públicas de los líderes de los tres partidos políticos en la legislatura. Es más probable que la distancia ideológica entre los jugadores con poder de veto de tipo partidario sea menor en un régimen autoritario. Además, los regímenes autoritarios tienen más probabilidad de tener menos jugadores con poder de veto institucionales que las democracias, pues muchos regímenes autoritarios carecen de pesos y contrapesos institucionales efectivos. Precisamente esta toma de decisiones racionalizada, combinada con una capacidad represora, es lo que condujo a muchos observadores a decir que los regímenes autoritarios tenían más probabilidad de implementar una estabilización económica y programas de ajuste estructural costosos que con frecuencia incluían cambios en las prioridades de gasto del gobierno. En teoría, la toma de decisiones decisiva y centralizada en los regímenes autoritarios le permite hacer cambios más dramáticos y necesarios a la política económica, incluido el gasto social. Si bien las democracias pueden gastar más en programas sociales, en general, se piensa que los regímenes autoritarios responden más rápidamente a la globalización. Cuando las presiones de la globalización deberían llevar a ajustes en los compromisos de gasto social, los regímenes autoritarios deberían ajustar su gasto social más fácilmente que los regímenes democráticos.¹

¹ En un sentido parecido, Brown y Hunter (1999) encontraron que el gasto social total en los regímenes autoritarios era mucho más responsivo a las condiciones económicas (precisamente, al desarrollo económico) que en las democracias en América Latina.

OTRAS EXPLICACIONES TEÓRICAS Y LIMITACIONES AL GASTO SOCIAL
EN LOS PAÍSES DE INGRESOS MEDIOS

Las teorías sobre el desarrollo del Estado de bienestar en los países de la OCDE reconocen, desde hace mucho, que las políticas sociales, en especial la seguridad social, se expanden cuando los países se vuelven más industrializados o económicamente desarrollados (Cutright, 1967). Gran parte de esta literatura temprana sugería que los países convergirían hacia cierto nivel funcional de protección social necesaria en las economías desarrolladas (Williamson y Fleming, 1977). Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que economías igualmente desarrolladas pueden tener no sólo distintos niveles de gasto social, sino diferentes tipos de gasto (por ejemplo, prestaciones directas de servicios *versus* pagos de transferencias) (Esping-Andersen, 1990, 1999; Huber, Ragin y Stephens, 1993; Huber y Stephens, 2001). Si bien los países varían en cuanto al nivel de sus compromisos fiscales con las políticas sociales y las maneras de implementar las políticas sociales, la investigación histórica comparativa sugiere que los patrones de gasto de los países persisten a lo largo del tiempo, y que es muy escaso un cambio extremo dentro de los países (Huber y Stephens, 2001). Esta persistencia de los patrones de gasto de largo plazo sugiere que es probable que las variaciones en el gasto social dentro de un país a lo largo del tiempo sean pequeñas. El desarrollo económico de corto plazo también puede afectar a los compromisos de gasto social. Un mayor crecimiento puede darles posibilidades a los estados de invertir más en educación pública y atención a la salud, mientras que las recesiones económicas puede producir mayores demandas de protección social (cf. Brown y Hunter, 1999).

La función de las instituciones financieras internacionales (IFI), como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en el asesoreamiento a los países en desarrollo sobre temas de desarrollo y políticas públicas, así como en el préstamo de fondos para estabilización y cambios programáticos, ha aumentado en las últimas décadas. En teoría, dicha dependencia de las IFI y otros donantes del mundo desarrollado debería provocar ajustes en las prioridades de gasto de acuerdo con las recomendaciones que hacen las IFI más importantes en

materia de políticas públicas. Sin embargo, en la práctica es difícil cuantificar y demostrar la influencia de las recomendaciones de estas IFI en cuanto a políticas públicas (Hunter y Brown, 2000). Puede ser difícil identificar con claridad las preferencias de políticas públicas de las IFI, pues pueden variar de una institución a otra e incluso entre los especialistas regionales de la misma institución. Además, en las últimas dos décadas, la influencia en las políticas públicas ha tomado una forma mucho más informal y sutil que la obvia y explícita condicionalidad de los préstamos del pasado (Teichman, 2001, 2004; también Madrid, 2003). Por ejemplo, en la sección latinoamericana del Banco Mundial, hubo un cambio intencional en la estrategia bancaria, de la condicionalidad explícita a discusiones informales y asistencia técnica en políticas públicas (Teichman, 2001). Asimismo, el financiamiento en apoyo de las reformas recomendadas de las políticas públicas, incluso en los sectores sociales, ha comenzado a “seguir” o extenderse después de que se promulgan las reformas “convenidas” (Dion, 2002). A pesar de que se piensa que un mayor financiamiento de las IFI lleva a más inversión en capital humano, lo cual se reconoce como una política gubernamental importante y legítima, el efecto estadístico de dicha influencia probablemente será débil, dadas las maneras informales y sutiles que asume la influencia. Lo mismo se aplica a la supuesta reducción en el gasto para protección social que supuestamente refleja la influencia de las IFI en las políticas públicas.

Altos niveles de endeudamiento gubernamental también pueden limitar la prestación de todas las formas de gasto social en países de ingresos medios (Hunter y Brown, 2000). Los gobiernos cortos de financiamiento pueden ser incapaces de desviar los escasos recursos hacia el gasto social. Además de las presiones de la globalización y las instituciones políticas antes mencionadas, es probable que estos otros factores ayuden a determinar los niveles de gasto social de los países de ingresos medios. La siguiente sección describe los datos usados para probar la hipótesis de las relaciones entre globalización, tipo de régimen y gasto en educación, salud y protección social.

DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS

El conjunto de datos consiste en paneles desbalanceados (*unbalanced panels*) de medidas de corte transversal de series de tiempo (*time series cross section*) (CTST) del gasto social y las variables independientes de 39 países de ingresos medios entre 1980 y 1999 (véase en el Apéndice de datos una lista completa de los países y algunas estadísticas descriptivas). Se identificó la población de los países de ingresos medios usando la definición de ingreso medio del Banco Mundial, la cual se basa en el ingreso nacional bruto. Los paneles están desbalanceados, en parte, porque varios países de Europa Oriental ingresaron a la muestra a principios de la década de 1990, a la mitad del periodo en estudio.

VARIABLES DEPENDIENTES: DESAGREGAR EL GASTO SOCIAL

En la literatura, “políticas sociales” y “programas sociales” son dos términos generales utilizados para abarcar una amplia variedad de políticas públicas, como educación, salud, vivienda, asistencia social, seguridad social y bienestar. En este artículo, el gasto social se desagrega en tres categorías de gasto agrupadas por función: educación, salud pública y protección social.² Si bien educación, salud y protección social caen en la amplia categoría de gasto social, la dinámica económica, demográfica y política que genera cada tipo de gasto puede diferir, tal como se sugirió antes. En particular, el gasto en educación y en atención a la salud suele ser considerado como una importante inversión en capital humano, mientras que la protección social es vista también como subsidios al consumo o gasto redistributivo.³ Las mediciones del *gasto en*

² Los datos del gasto en moneda nacional provienen del Fondo Monetario Internacional (2002) y fueron ajustados usando las cifras del PIB en moneda local del Banco Mundial (2001). De acuerdo con el documento *Government Finance Statistics Manual 2001*, del FMI, todos los gastos gubernamentales se clasifican por función. Esto significa que los gastos de atención a la salud administrados por institutos de seguridad social se clasifican como gastos de atención a la salud y no como protección social, mientras que las prestaciones por enfermedad se clasifican como protección social. Además, los gastos en salud y en educación (incluidas las becas) asociados con los programas de combate a la pobreza se incluyen en salud o educación, mientras que los subsidios al ingreso se incluyen en protección social (FMI, 2001, pp. 107-108).

³ Todos los gastos se codifican por función, y no según la institución que administre el gasto. Los gastos de atención a la salud, incluso si los administran instituciones de seguridad social, se codifican como salud y

*educación, salud y protección social son un porcentaje del producto interno bruto (PIB) a fin de capturar el compromiso del Estado con los recursos.*⁴ Cada medición refleja el gasto público en el ámbito nacional y no incluye la inversión o el gasto subnacional o privado.

VARIABLES INDEPENDIENTES: EXPLICACIONES TEÓRICAS DEL GASTO SOCIAL, LOS COMPROMISOS DEL GASTO SOCIAL Y EL CAMBIO EN EL GASTO

Los efectos esperados por la hipótesis de la globalización se miden utilizando datos sobre el grado real de integración de los mercados de bienes, servicios y capital, y no por medio de las políticas gubernamentales acerca de dicha integración. La primera de las tres mediciones utilizadas captura la integración en los mercados de bienes y servicios. *Comercio* es medido por las *importaciones y exportaciones como porcentaje del PIB*. La apertura comercial puede estimular la inversión en capital humano cuando los países tratan de mejorar su capacidad productiva y su competitividad internacional. Al mismo tiempo, la apertura puede presionar para bajar el gasto en protección social, que a menudo es financiado, en parte, por los impuestos al trabajo.

La globalización también ha aumentado la integración de los mercados financieros y, especialmente en la década de 1990, nuevas reducciones en los controles de capital de muchos países. Estudios previos han medido la integración financiera con mediciones muy sencillas de apertura de la cuenta de capital, a menudo reduciendo todos los casos en “abierto” o “cerrado”, de acuerdo con una codificación de controles de capital impuestos por cada país (por ejemplo, Kaufman y Segura, 2001). En lugar de medir la integración potencial del mercado de capital de un país en la economía mundial, se usan los *flujos de*

no como protección social. De igual modo, los gastos en salud, administrados por programas de combate a la pobreza, son codificados como salud. Los subsidios al ingreso administrados por programas de combate a la pobreza son codificados como protección social, aunque obviamente son muy pequeños en comparación con gastos de seguridad social más tradicionales en esta categoría.

⁴ Los estudios que usan mediciones alternativas, como el gasto per cápita o como porcentaje del gasto gubernamental total, encuentran resultados significativamente parecidos a los del gasto como porcentaje del PIB (Hunter y Brown, 2000; Rudra, 2002). Aquí se utiliza el gasto como porcentaje del PIB porque por lo general se reconoce que representa el *compromiso* del gobierno con el gasto, y no la disponibilidad per cápita de recursos.

capital privado brutos como porcentaje del PIB (flujos de K brutos) para medir la apertura de los mercados financieros de los países. Esta medición, que también es usada por Rudra y Haggard (2001), mide los flujos reales de capital y no el grado de regulación gubernamental a los movimientos de capital.⁵ Al igual que la medición del comercio, los flujos de capital privado brutos representan el grado real en el que el mercado de un país está integrado al mercado global, y no su potencial de integrarse. La globalización de los mercados financieros debería aumentar la presión para que los gobiernos minimicen los déficit fiscales, lo cual puede limitar los compromisos de gasto social.

La tercera medición de la integración global captura el grado en el que los países albergan inversión extranjera directa. *La inversión extranjera directa (IED) neta como porcentaje del PIB* debería reflejar el grado en el que la economía nacional depende de dichas inversiones para mantener su competitividad. Niveles elevados de IED en los países de ingresos medios deberían conducir a mayor inversión en capital humano y a reducciones en los gastos de protección social.

Para probar la hipótesis de que las democracias gastan más en programas sociales, pero que los regímenes autoritarios responden más a la globalización porque hay menos jugadores con poder de veto, se construyó una medición dicotómica de la democracia a partir de la medición Polity IV (Marshall y Jaggers, 2000). La calificación original de *polity* es una medición ordinal en la cual los cambios de una unidad en la calificación no se interpretan fácilmente ni de la misma manera en todos los puntos de la escala. En cambio, *democracia* se mide con un valor de uno para cada año en que un país recibió una calificación de Polity IV mayor que seis.⁶ Si bien hay cierta pérdida de información en esta construcción, la variable dicotómica hace mucho más sencilla la interpretación.

⁵ Una limitación de esta medición, como señalaron Rudra y Haggard (2001), es que no señala la dirección ni siquiera de la mayoría de flujos de capital. Sin embargo, es posible que los exportadores de capital neto varíen de maneras importantes de los importadores de capital netos. Mosley (2000) afirma que los flujos pueden ser la medición apropiada de la integración financiera en los países de ingresos medios cuando los inversionistas desean castigar un mal desempeño del gobierno con cambios en los niveles de inversión, mientras que los diferenciales de la tasa de interés son el precio que los gobiernos pagan en las economías industrializadas avanzadas.

⁶ Esta codificación también es congruente con la de Kaufman y Segura (2001).

Como se sugirió antes, los modelos de gasto social deberían controlar otros cinco factores que probablemente influyan en los niveles de gasto social de un año a otro. Primero, el gasto social puede ser sensible a las condiciones económicas, tal como el nivel de desarrollo o producción económica. El *producto interno bruto per cápita rezagado* (*PIB per cápita*) mide el nivel de desarrollo económico de cada país en un año determinado.⁷ La hipótesis es que mayores niveles de desarrollo dan a los estados mayor capacidad para prestar servicios sociales.

Segundo, el gasto social también puede ser sensible a resultados económicos de corto plazo, como lo mide el *crecimiento del PIB*. Para países con niveles relativamente altos de desarrollo económico, o en años de este tipo, podríamos esperar que aumente la inversión en capital humano y, por tanto, el gasto en salud y educación debido a la prosperidad. Por otro lado, el gasto en protección social puede aumentar como respuesta a un crecimiento negativo o a una situación económica desfavorable, pues los gobiernos deberían satisfacer los gastos de ayuda social que buscan aliviar los efectos de la disminución económica, al tiempo que también se ve privado de las contribuciones basadas en el ingreso para dichos beneficios por parte de los trabajadores y patrones.

Tercero, las tendencias demográficas también pueden generar demandas de ciertos tipos de programas sociales, lo cual a su vez puede dar como resultado presión política para gastar en esas áreas. Por ejemplo, debería esperarse que países con una población más joven tengan un mayor gasto en educación, mientras que los países con poblaciones envejecidas deberían gastar más en protección social. El *porcentaje de la población menor de 15 años* y el *porcentaje de la población mayor de 65 años* miden la demanda demográfica de gasto en educación y protección social, respectivamente. De manera similar, altas concentraciones de jóvenes y viejos en relación con el tamaño de la población en edad de trabajar (tasa de dependencia) debería generar demanda de servicios de salud, pues los muy jóvenes y los muy viejos frecuentemente requieren más servicios de salud.

Cuarto, el grado en el que los compromisos de gasto social del gobierno pue-

⁷ Los datos económicos, comerciales, financieros y demográficos provienen de Banco Mundial (2001).

den estar influidos o limitados por la dependencia de ayuda financiera de donantes extranjeros o instituciones financieras internacionales es medido por *la ayuda oficial al desarrollo (AOD) como porcentaje del PIB*. Esta medición incluye transferencias netas de bienes y servicios, préstamos con un subsidio de cuando menos 25% y asistencia técnica de cualquier miembro del Comité de Asistencia para el Desarrollo para el país de ingresos medios (Banco Mundial, 2001). Dicha ayuda puede conducir a una mayor inversión en capital humano y algunas restricciones al gasto en protección social.

Por último, es probable que un gran endeudamiento limite la capacidad del gobierno para dedicar los recursos adecuados a programas sociales, como salud y educación. El *servicio total de la deuda como porcentaje de las exportaciones de bienes y servicios* mide la suma de los pagos al principal e intereses de la deuda de largo y corto plazo del FMI (Banco Mundial, 2001). Estas cinco variables de control deberían aislar los efectos de la globalización y el tipo de régimen político sobre los compromisos de gasto social. Juntas, todas estas mediciones incluyen la mayoría de los factores significativos que se cree influyen en las decisiones sobre el gasto social.⁸

MODELO DEL NIVEL DE GASTO SOCIAL Y CAMBIO EN EL GASTO SOCIAL

Los datos agrupados, como los usados en este estudio, a menudo violan las suposiciones del análisis de regresión de mínimos cuadrados ordinarios (OLS por sus siglas en inglés). En particular, los datos agrupados presentan a menudo errores esféricos que exhiben cierta combinación de heterocedasticidad del

⁸ La omisión más significativa es una medición de la identificación partidaria. Si bien algunos conjuntos de datos tienen mediciones sobre las preferencias partidarias (por ejemplo, la Base de Datos de Indicadores Políticos del Banco Mundial), las codificaciones no siempre son congruentes ni precisas (cf. Rudra y Haggard, 2001). Además, con excepción de la investigación de las democracias industrializadas avanzadas (Garrett y Lange, 1991; Huber, Ragin y Stephens, 1993; Garrett, 1998), pocos estudios cuantitativos entre países han proporcionado efectos consistentes y esperados de las preferencias partidarias en las especificaciones. Las variables adicionales que se modelarán en futuras repeticiones de este proyecto incluyen el endeudamiento y la estructura del mercado laboral, que han resultado importantes en estudios previos (Brown y Hunter, 1999; Rudra, 2002; Rudra y Haggard, 2001).

panel, correlación contemporánea entre los paneles y autocorrelación (Stimson, 1985; Beck y Katz, 1995, 1996). Ante la presencia de dicha estructura de error, los cálculos del punto OLS no estarán sesgados, pero los errores estándar no serán eficientes. Sigue existiendo mucho debate acerca de los modelos y los procedimientos de estimación apropiados, y muchas de las “correcciones” más populares sólo son apropiadas para ciertas estructuras de datos. Por ejemplo, la corrección más común para eliminar la heterocedasticidad del panel y la correlación contemporánea entre los paneles no puede dar cabida a los paneles desbalanceados y requiere que el número de periodos exceda al número de cortes transversales.⁹ Una corrección alternativa son los errores estándar robustos Huber/White utilizados aquí.¹⁰

Los investigadores también incluyen a menudo efectos fijos por país, o unidad, en los modelos de corte transversal de series de tiempo para capturar el efecto de variables no medidas que pueden explicar la variación entre países. En esencia, dichos efectos fijos calculan interceptos separados por unidad. Los efectos fijos serían perfectamente colineales con variables independientes que no varían significativamente dentro de cada unidad. En dichos casos, no pueden estimarse los efectos fijos para los países que no sufren variación en una variable independiente tal como tipo de régimen político. Como indica Beck (2001), cuando las variables estables o que cambian lentamente son variables teóricas importantes, los investigadores deberían decidir si la importancia teórica de las variables pesa más que los beneficios de los efectos fijos. Puesto que el tipo de régimen político es la variable independiente teórica clave, los efectos fijos no se incluyen en los modelos presentados en el cuadro 1.¹¹ Los efectos fijos también pueden inducir sesgos en los coeficientes restantes cuan-

⁹ Los errores estándar del panel corregido (PCSE, Beck y Katz, 1995) exigen que el número de periodos exceda el número de casos, y estudios recientes sugieren que los PCSE tienen un mal desempeño cuando el número de paneles excede con mucho el número de periodos (Pagter Kristensen y Wawro, 2003). Los paneles de esta muestra están desbalanceados, en parte, porque muchos países de Europa Oriental sólo aparecen en la población a mitad de la serie 1980-1999.

¹⁰ Los errores se calcularon utilizando la opción “sólida” de Stata 9.0 que usa la transformación Huber/White para estimar los errores estándar robustos.

¹¹ Véase una discusión más profunda de los efectos fijos de los modelos de política económica en Beck y Katz (2001 y 2004).

do se incluye una variable dependiente rezagada en el modelo (Greene, 1999, p. 583).¹²

Puesto que la prueba de los efectos fijos de la unidad no tendría sentido cuando se incluye la democracia en el modelo, realicé otras dos pruebas para determinar si es probable que la omisión de los efectos fijos cree un sesgo significativo. Primero, probé los efectos fijos regionales al calcular todos los modelos del cuadro 1 con variables *dummy* regionales y luego realizar una prueba Chow o F en los coeficientes de las variables *dummy*. Puesto que los argumentos a favor de los efectos fijos a menudo surgen de las preocupaciones por las variables omitidas (o no mensurables), tal como cultura o legados históricos, los efectos regionales podrían aproximar algunos de los efectos específicos de la unidad. Ninguna de las pruebas indicó que los efectos regionales fijos eran necesarios ($p > 0.05$), y la inclusión de *dummies* por región no tuvo efecto sobre los coeficientes de las otras variables presentadas en las regresiones del cuadro 1. Segundo, usé un procedimiento “jackknife” modificado para producir el error de la predicción absoluta media de cada unidad de la muestra; los errores absolutos medios se presentan en el Apéndice de datos.¹³ Los resultados de este procedimiento muestran que los casos que predijo mal el modelo a menudo son aquellos para los que hay pocos datos y no series largas de datos distantes de los países individuales. Finalmente, el Apéndice de regresión incluye los resultados estimados con efectos fijos para los modelos completos del cuadro 1. Los resultados coinciden mucho con los del cuadro 1. Si bien la significancia estadística y el signo de algunas variables cambian en los modelos de efectos fijos, sólo en un caso el coeficiente cambia *tanto* el signo *como* la significancia estadística.¹⁴ En general, los problemas debidos a los sesgos creados por la

¹² Las pruebas experimentales sugieren que el sesgo puede ser modesto (Beck y Katz, 2004).

¹³ Beck (2001) discute la utilidad de dicha prueba. En esencia, se calculó cada modelo por separado dejando un país a la vez y luego se usó el modelo para predecir valores para los países omitidos. El error absoluto promedio es la diferencia entre los valores predichos y los observados para cada unidad.

¹⁴ En el modelo de educación con efectos fijos, el coeficiente de comercio cambia, pero también el coeficiente de la población menor de 14 años. En el modelo de efectos fijos, el porcentaje de la población menor de 14 años tenía un efecto *negativo* sustancialmente grande y sumamente significativo sobre los gastos en educación. Este resultado sugiere un sesgo creado por la inclusión tanto de los efectos fijos y de una variable dependiente rezagada, como de la colinealidad de algunos efectos de la unidad con la democracia.

combinación de una variable dependiente rezagada y los efectos fijos y la colinealidad de los efectos fijos con la democracia pesan más que el riesgo de los sesgos creados por omitir los efectos fijos.

De igual modo, no hay lineamientos claros para la mejor manera de abordar la autocorrelación, y muchas de las opciones implican disyuntivas entre coherencia o eficiencia. En vista de la alta probabilidad de la autocorrelación en datos de política económica, esas decisiones no son triviales. Beck y Katz (1995) recomiendan modelar la correlación con una variable dependiente rezagada. Ante esta situación, se hicieron pruebas de autocorrelación de dos maneras. Primero, se realizó la prueba del multiplicador Lagrange (ML) recomendada por Beck y Katz (1996) sobre modelos de variables dependientes con y sin variables dependientes rezagadas como regresores. Segundo, los modelos también fueron estimados usando la transformación Prais-Winsten con un parámetro autorregresivo común, en lugar de una variable dependiente rezagada. Todos los resultados indican un alto grado de autocorrelación de primer orden en la variable dependiente que sólo fue abordado de manera adecuada por una variable dependiente rezagada.¹⁵ Por consiguiente, se incluyó una variable dependiente rezagada en los modelos del *nivel de gasto social*, a pesar del hecho de que las variables dependientes rezagadas suelen reducir los efectos de otras variables teóricamente relevantes (Achen, 2000).

RESULTADOS PARA EL GASTO SOCIAL Y EL TIPO DE RÉGIMEN POLÍTICO

Los modelos del nivel de gasto para educación, salud y protección social y la globalización y el tipo de régimen político se calcularon por separado. Los resultados se presentan en el cuadro 1. Los efectos de la globalización económica en los compromisos de gasto social en los países de ingresos medios son varia-

¹⁵ En casi todos los casos, los resultados indicaron un parámetro estimado de la correlación serial que excedió 0.9. Además, los análisis de los residuales, tanto de los modelos dinámicos como de los modelos estáticos con la corrección Prais-Winsten, indicaron que la correlación serial fue de primer orden. Sin embargo, sólo los modelos con la variable dependiente rezagada no tuvieron ninguna autocorrelación residual en sus errores. Los residuales de los modelos de regresión Prais-Winsten de todos modos demostraron pruebas de autocorrelación. Por lo tanto, se usó la variable dependiente rezagada a pesar de sus desventajas (cf. Achen, 2000).

CUADRO 1. NIVELES DE GASTO SOCIAL Y TIPO DE RÉGIMEN, 1980-1999

	Educación		Salud		Protección social	
Variable dependiente $t-1$	0.924*** (0.020)	0.927*** (0.020)	0.954*** (0.019)	0.950*** (0.020)	0.948*** (0.020)	0.948*** (0.020)
Democracia $t-1$	0.008 (0.050)	0.149* (0.091)	0.046 (0.042)	0.105* (0.073)	0.082 (0.085)	0.383* (0.189)
Flujos de capital $t-1$	0.084* (0.057)	0.075* (0.057)	0.090 (0.095)	0.058 (0.091)	0.141* (0.102)	0.148* (0.107)
Comercio $t-1$	0.090 (0.104)	0.169* (0.121)	0.147* (0.084)	0.275** (0.112)	-0.126 (0.151)	-0.043 (0.212)
IED neta $t-1$	0.940 (1.034)	1.066 (1.855)	0.768 (1.045)	-1.645 (2.064)	0.776 (2.257)	4.232 (4.069)
Democracia × flujos de capital $t-1$		0.070 (0.237)		0.395 (0.443)		0.191 (0.320)
Democracia × comercio $t-1$		-0.194* (0.145)		-0.179* (0.137)		-0.316 (0.264)
Democracia × IED neta $t-1$		-0.653 (2.279)		2.495 (2.514)		-5.681 (4.914)
Log PIB per cápita $t-1$	-0.004 (0.013)	-0.009 (0.014)	-0.014 (0.012)	-0.019* (0.011)	0.038* (0.025)	0.029 (0.024)
Crecimiento del PIB $t-1$	0.542 (0.522)	0.456 (0.507)	0.000 (0.549)	-0.050 (0.556)	0.232 (0.856)	0.021 (0.851)
Ayuda al desarrollo $t-1$	1.033 (0.835)	0.879 (0.847)	-0.327 (0.754)	-0.519 (0.708)	1.550 (1.556)	1.425 (1.551)
Servicio de la deuda $t-1$	0.189 (0.193)	0.156 (0.196)	0.098 (0.142)	0.121 (0.147)	-0.117 (0.419)	-0.206 (0.437)
Población menor de 14 años $t-1$	18.572 (42.248)	14.612 (42.451)				
Tasa de dependencia $t-1$			-10.839 (18.187)	-13.233 (17.697)		
Población mayor de 65 años $t-1$					7.187** (2.906)	7.236** (2.921)
Intercepto	0.050 (0.222)	0.029 (0.219)	0.063 (0.192)	0.051 (0.185)	-0.182 (0.172)	-0.236* (0.176)
R ²	0.904	0.905	0.939	0.940	0.970	0.970
VIF promedio	1.51	3.24	1.49	3.18	1.91	3.48
N	450	450	451	451	454	454

* $p < 0.100$.

** $p < 0.001$.

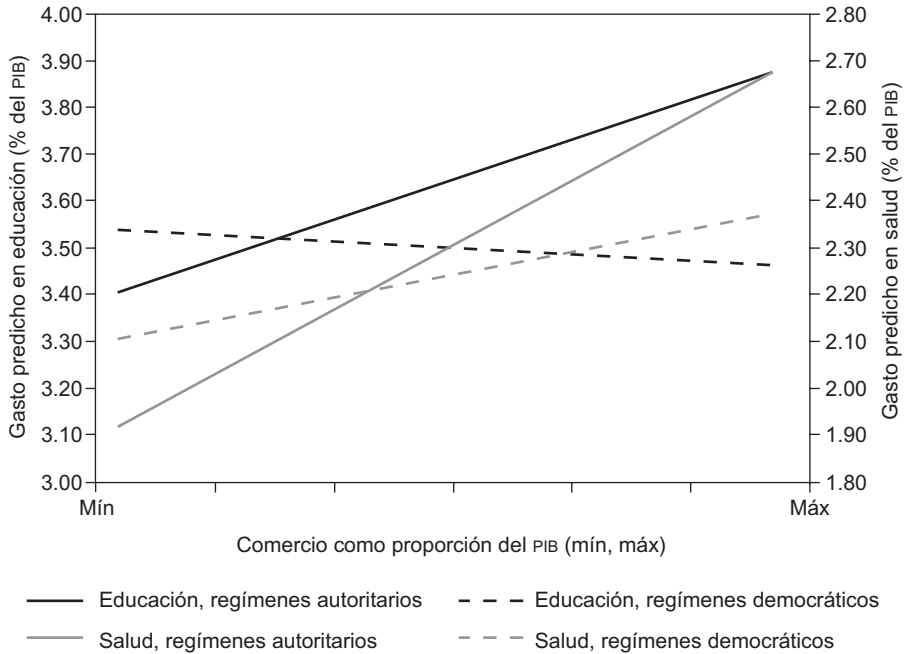
*** $p < 0.001$ en prueba de una cola. Los errores estándar robustos aparecen entre paréntesis.

dos. La integración comercial tiene un efecto positivo en los gastos en salud pública y en educación, lo que sugiere que los gobiernos con mercados abiertos sienten la presión para invertir en capital humano para mantener su competitividad. En cambio, la integración parece que presiona por la disminución del gasto en protección social, aunque el efecto no es estadísticamente significativo. Esos resultados coinciden con estudios previos que encuentran que la integración comercial produce más inversión en capital humano pero menos gasto en protección social (Dion, 2000; Kaufman y Segura, 2001).

Los resultados de las mediciones de integración financiera no siempre son congruentes con las expectativas teóricas, así como los resultados tampoco suelen ser estadísticamente significativos. Parece que la inversión extranjera directa neta no tiene un efecto teóricamente coherente o apreciable en ningún tipo de gasto social. Quizás los gobiernos de los países con ingresos medios, donde la inversión extranjera directa no ha alcanzado los niveles de los países de la OCDE, no se sienten limitados por la inversión extranjera. Contrario a la expectativa teórica de que los flujos de capital harían que los gobiernos restringieran todos los tipos de gasto debido a preocupaciones por el déficit presupuestal, los flujos de capital parecen tener un efecto positivo congruente en los niveles de gasto en educación, salud y protección social. Parece que es igualmente probable que los regímenes autoritarios y los democráticos gasten más en programas sociales cuando los flujos de capital son grandes.

Los resultados para el efecto del tipo de régimen político y el gasto social reflejan, en gran parte, los patrones esperados sugeridos tanto por la literatura sobre votantes medianos como por el número de jugadores con capacidad de veto en cada tipo de régimen. Si bien las democracias deberían gastar más que los regímenes autoritarios debido a las diferencias del ingreso del votante mediano y su demanda por gasto social en cada régimen, los resultados sugieren que el compromiso promedio con el gasto social no difiere significativamente entre los dos tipos de regímenes. Por otro lado, los resultados apoyan la hipótesis de que los jugadores con capacidad de veto asociados con los regímenes autoritarios y democráticos afectan la capacidad de los gobiernos para ajustar el gasto en respuesta a las presiones de la globalización. En la medida en la que

FIGURA 3. NIVEL PREDICHO DE GASTO EN EDUCACIÓN PÚBLICA, SALUD Y COMERCIO



una mayor integración económica promueve una mayor inversión en educación pública y salud, parece que los regímenes autoritarios ajustan su inversión en capital humano. Puesto que los estados se están integrando mucho en los mercados globales, los regímenes autoritarios gastan más en comparación con las democracias en las áreas de educación pública y salud. La figura 3 describe la relación entre integración comercial y gasto en educación y salud en los regímenes autoritarios y democráticos. La figura 3 ilustra con claridad que, en mercados cerrados con poca integración comercial, los regímenes democráticos invierten más en salud y educación que los regímenes autoritarios. En una economía cerrada, el votante mediano de una democracia demanda más gasto que en un régimen autoritario. Sin embargo, cuando la economía está

más integrada en el mercado global, los regímenes autoritarios aumentan su inversión en capital humano para mantener la competitividad. Los regímenes autoritarios son capaces de abandonar el gasto de inversión preferido por el seguidor mediano y aumentar el gasto en educación y salud, porque la toma de decisiones está centralizada y tienen la capacidad de reprimir a los inconformes. Sin embargo, lo que el modelo no puede predecir es hasta cuándo pueden los regímenes autoritarios sostener los niveles de gasto social por arriba de las demandas de sus seguidores antes de que el régimen autoritario encuentre que su base de apoyo interna le retira el apoyo. Si bien, en términos generales, los niveles de gasto entre las democracias y los regímenes autoritarios son los mismos, la integración económica puede provocar que los regímenes autoritarios inviertan más en capital humano que las democracias. En vista de las diferencias entre regímenes democráticos y autoritarios, ¿qué papel desempeñan las instituciones políticas en la explicación de las diferencias entre las democracias? Ésta es la pregunta que trato a continuación.

IMPLICACIONES Y DISCUSIÓN

El análisis anterior ha demostrado que la globalización y el tipo de régimen político ayudan a determinar los compromisos del gobierno con el gasto social y ambos grupos de factores pueden tener diferentes efectos en los distintos tipos de gasto social. La integración comercial, que es mucho más extensiva que la integración financiera en los países de ingresos medios, lleva a una mayor inversión en educación pública y salud, también produce reducciones en seguridad social compensatoria y gasto en bienestar. Estos efectos son aún más pronunciados en los regímenes autoritarios, donde la toma de decisiones está más centralizada y aislada de las presiones sociales que en las democracias. Si bien las democracias suelen invertir más en capital humano en comparación con los regímenes autoritarios en mercados relativamente cerrados, las democracias que están altamente integradas en los mercados globales invierten menos en capital humano que los regímenes autoritarios de mercado abierto.

El análisis aquí presentado también deja sin responder varias preguntas im-

portantes. Por ejemplo, algunos análisis han sugerido que la importancia de la dicotomía democracia-autoritarismo puede haber sido exagerada con respecto a la primera generación de reformas estructurales y que es probable que existan importantes diferencias más sutiles (Nelson, 1990; Haggard y Webb, 2000 [1993]). En vista de la importancia de las instituciones políticas en las economías industrializadas avanzadas, es probable que haya importantes diferencias en el gasto social entre democracias de ingresos medios. Por ejemplo, estudios recientes sugieren que “instituciones electorales incluyentes” (Swank, 2002) o “jugadores con capacidad de veto cooperadores” (Birchfield y Crepez, 1998; Crepez y Moser, 2004) generarán mayores niveles de gasto de seguridad social y transferencias en los países de la OCDE. Según estos autores, a medida que aumenta el número de partidos políticos en el gobierno o en la legislatura, también aumenta la probabilidad de un mayor gasto social y redistributivo. El uso de la representación proporcional, que está directamente relacionada con el número de partidos políticos, también es probable que produzca mayores niveles de gasto social (Swank, 2002; Crepez y Moser, 2004). La lógica de este argumento sugiere que, a medida que aumenta el número de partidos en el gobierno y la legislatura, la formulación de las políticas públicas necesariamente conlleva un grado de clientelismo que conduce a mayores gastos en programas sociales. Por otro lado, se dice que la “dispersión de la autoridad que toma las decisiones” (Swank, 2002) y los “jugadores con capacidad de veto competitivos” (Birchfield y Crepez, 1998; Crepez y Moser, 2004) reducen el nivel de gasto social. Las instituciones políticas que proporcionan puntos de veto mediante los cuales los actores políticos pueden oponerse o bloquear una legislación, tal como el presidencialismo, el bicameralismo, el federalismo y el uso de referendos, llevan al desarrollo de estados de bienestar minimalistas y menores niveles de gasto en seguridad social y transferencias (Huber, Ragin y Stephens, 1993; Birchfield y Crepez, 1998; Swank, 2002; Crepez y Moser, 2004). Estos estudios demuestran que las instituciones políticas que proporcionan puntos de veto que les permiten a los actores políticos influir en la toma de decisiones reducen los niveles de gasto social.

De acuerdo con la misma lógica, la concentración de la toma de decisiones

también puede facilitar recortes en el gasto en educación pública, atención a la salud, seguridad social y bienestar. En los estados de bienestar de la OCDE, la concentración de la toma de decisiones (es decir, el menor número de puntos de veto) está asociada con mayores niveles de racionalización del Estado de bienestar (Huber y Stephens, 2001; Hicks y Zorn, 2001). Los estudios sobre la reforma al régimen de pensiones y la atención a la salud en América Latina y Europa Oriental en la última década también sugieren que cuando la autoridad que toma las decisiones está concentrada y hay pocos jugadores con capacidad de veto, las reformas neoliberales o los recortes a los programas sociales son más probables (Huber, 1999; Kay, 1999; Haggard y Kaufman, 2001; Madrid, 2003; Orenstein, s.f.). La concentración de la toma de decisiones aumenta la probabilidad *tanto* de aumentos *como* de disminuciones en los compromisos de gasto social; más jugadores institucionales con capacidad de veto reducen la probabilidad *tanto* de aumentos *como* de disminuciones en los compromisos de gasto social. Cuando las instituciones políticas generan más jugadores institucionales y partidarios con capacidad de veto, es más probable la estabilidad de las políticas públicas y pocos cambios en las políticas. Investigaciones futuras deberán tratar de incorporar mediciones sobre las instituciones políticas nacionales, a fin de probar estas hipótesis más allá de las democracias industrializadas avanzadas.

A quienes conocen el rico trabajo empírico sobre bienestar social en los países de la OCDE les parecerá perturbador que en este estudio se haya omitido la densidad de la mano de obra organizada, el corporativismo social y la fuerza del partido demócrata social (Stephens, 1979; Huber, Ragin y Stephens, 1993; Boix, 1998; Garrett, 1998; Huber y Stephens, 2001). La fortaleza y capacidad organizacional de la mano de obra organizada y de las instituciones corporativistas de representación de intereses han desempeñado obviamente un importante papel en el desarrollo del Estado de bienestar (Stephens, 1979; Huber, Ragin y Stephens, 1993) y ayudan a explicar la resistencia a las presiones de la globalización en algunos casos (Boix, 1998; Garrett, 1998; Hicks, 1999; Huber y Stephens, 2001; Swank, 2002, 2003). Por desgracia, las mediciones que permitan estudios comparados entre países para la organización de la mano de obra, el

corporativismo y la democracia social no están disponibles para los países en desarrollo.¹⁶

Del mismo modo, las preferencias partidarias de los gobiernos democráticos también deberían importar. Por ejemplo, los gobiernos social demócratas y demócrata cristianos deberían gastar más en bienestar que los gobiernos conservadores (Huber, Ragin y Stephens, 1993; Boix, 1998; Hicks, 1999; Huber y Stephens, 2001). De nueva cuenta, la escasez de datos disponibles impide probar estas hipótesis relevantes en los países en desarrollo.¹⁷ En teoría, el partido del gobierno debería explicar parte de la variación en los niveles de gasto social encontrada en los países de ingresos medios, aun cuando las instituciones políticas limitaran la capacidad de los partidos políticos para implementar su nivel preferido de inversión en capital humano o gasto de bienestar social redistributivo. Hasta que dichos datos estén totalmente recopilados, es probable que las explicaciones del gasto social en el mundo en desarrollo sigan incompletas. Es obvio que la globalización y las instituciones políticas crean, tanto oportunidades para que los gobiernos de países con ingresos medios inviertan en capital humano, como limitaciones al gasto en protección social; sin embargo, pese a su importancia, sólo son parte de la respuesta al rompecabezas. Las investigaciones futuras deberían esforzarse por incorporar las variables de instituciones políticas democráticas, organización laboral y preferencia partidaria en los estudios sobre el gasto social en los países en desarrollo. Pg

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Achen, Chris (2000), "Why Lagged Dependent Variables can Suppress the Explanatory Power of Other Independent Variables", ponencia presentada en las Summer Political Methodology Meetings, UCLA, 20-22 de julio.

¹⁶ Véase en Rudra (2002) un intento de construir una medición sustituta para el poder de la mano de obra en el mundo en desarrollo. Si bien la medición aparentemente se desempeña igual que las mediciones del corporativismo laboral, está mejor concebida como una medición de la estructura general del mercado laboral.

¹⁷ Véase en Kaufman y Segura (2001) un intento por superar este problema de datos para América Latina.

- Banco Mundial (1993), *World Development Report 1993: Investing in Health*, Washington, World Bank.
- (2001), *World Development Indicators*, Washington, World Bank [disco compacto].
- (2004), *Database of Political Institutions*, <http://econ.worldbank.org/view.php?type=18&id=25467>.
- Barro, Robert J. (1991), “Economic Growth in a Cross Section of Countries”, *Quarterly Journal of Economics*, vol. 106, núm. 2, mayo, pp. 407-443.
- Beck, Nathaniel (2001), “Time-Series-Cross-Section Data: What Have We Learned in the Past Few Years?”, *Annual Review of Political Science*, vol. 4, pp. 271-293.
- Beck, Nathaniel y Jonathan N. Katz (1995), “What to Do (and not to Do) with Time-series Cross-section Data”, *American Political Science Review*, vol. 89, septiembre, pp. 634-647.
- (1996), “Nuisance vs. Substance: Specifying and Estimating Time-Series-Cross-Section Models”, *Political Analysis*, vol. 6, pp. 1-36.
- (2001), “Throwing out the Baby with the Bath Water: A Comment on Green, Yoon, and Kim”, *International Organization*, vol. 55, núm. 2, primavera, pp. 487-495.
- (2004), “Time-series Cross-Section Issues: Dynamics, 2004”, documento inédito, New York University y California Institute of Technology.
- Biglaiser, Glen (2002), *Guardians of the Nation? Economists, Generals, and Economic Reform in Latin America*, Notre Dame, IN, University of Notre Dame Press.
- Birchfield, Vicki y Markus Crepaz (1998), “The Impact of Constitutional Structures and Collective and Competitive Veto Points on Income Inequality in Industrialized Democracies”, *European Journal of Political Research*, vol. 34, pp. 175-200.
- Boix, Carles (1998), *Political Parties, Growth and Equality*, Cambridge, Cambridge University Press.
- (2003), *Democracy and Redistribution*, Cambridge, Cambridge University Press.

- Brown, David y Wendy Hunter (1999), "Democracy and Social Spending in Latin America, 1980-92", *American Political Science Review*, vol. 93, diciembre, pp. 779-790.
- Cameron, David (1978), "The Expansion of the Public Economy: A Comparative Analysis", *American Political Science Review*, vol. 72, diciembre, pp. 1243-1261.
- Crepaz, Markus M. L. y Ann W. Moser (2004), "The Impact of Collective and Competitive Veto Points on Public Expenditures in the Global Age", *Comparative Political Studies*, vol. 37, núm. 3, abril, pp. 259-285.
- Cutright, Phillips (1967), "Political Structure, Economic Development and National Social Security Programs", *American Journal of Sociology*, vol. 70, pp. 537-350.
- Dion, Michelle (2000), "Public Health, Education, and Social Security Expenditures in Latin America, 1980-1994", ponencia presentada en la 2000 Meeting of the Southern Political Science Association, Atlanta, GA, 8-11 de noviembre.
- (2002), *The Progress of Revolution? Mexico's Welfare Regime in Comparative and Historical Perspective*, tesis de doctorado, University of North Carolina at Chapel Hill.
- Esping-Andersen, Gösta (1990), *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, Princeton, Princeton University Press.
- (1999), *Social Foundations of Postindustrial Economies*, Nueva York, Cambridge University Press.
- Fondo Monetario Internacional (2001), *Government Finance Statistics Manual 2001*, Washington, International Monetary Fund.
- (2002), *Government Finance Statistics database*, base de datos.
- Frieden, Jeffry, Manuel Pastor, Jr. y Michael Tomz (eds.) (2000), *Modern Political Economy and Latin America: Theory and Policy*, Boulder, CO, Westview Press.
- Friedman, Thomas (2000), *The Lexus and the Olive Tree*, Nueva York, Anchor/Doubleday.
- Garrett, Geoffrey (1998), *Partisan Politics in the Global Economy*, Nueva York, Cambridge University Press.

- Garrett, Geoffrey (2001), "Globalization and Government Spending around the World", *Studies in Comparative International Development*, vol. 35, núm. 4, invierno, pp. 3-29.
- Garrett, Geoffrey y Peter Lange (1991), "Political Responses to Interdependence: What's Left for the Left?", *International Organization*, vol. 45, núm. 4, pp. 539-564.
- Greene, William H. (1999), *Econometric Analysis*, 4a. ed., Upper Saddle River, NJ, Prentice-Hall.
- Haggard, Stephan y Robert R. Kaufman (2001), "Introduction", en János Kornai, Stephan Haggard y Robert R. Kaufman (eds.), *Reforming the State: Fiscal and Welfare Reform in Post-Socialist Countries*, Nueva York, Cambridge University Press, pp. 1-24.
- Haggard, Stephan y Steven Webb (2000) [1993], "What Do We Know About the Political Economy of Economic Policy Reform?", en Jeffry Frieden, Manuel Pastor y Michael Tomz (eds.), *Modern Political Economy and Latin America: Theory and Policy*, Boulder, CO, Westview Press.
- Hicks, Alexander (1999), *Social Democracy and Welfare Capitalism*, Ithaca, NY, Cornell University Press.
- Hicks, Alexander y Christopher Zorn (2001), *Welfare Retrenchment and the "New Politics": Explaining Reversals of Welfare Expansion*, Atlanta, GA, Claus M. Halle Institute for Global Learning Occasional Paper, Emory University.
- Hirst, Paul y Grahame Thompson (1999), *Globalisation in Question*, Cambridge, Polity Press.
- Huber, Evelyne (1999), "Globalization and Social Policy Developments in Latin America", ponencia presentada en la conferencia Globalization and the Future of the Welfare State: Interregional Comparisons, Brown University, 22-23 de octubre.
- Huber, Evelyne, Charles Ragin y John D. Stephens (1993), "Social Democracy, Christian Democracy, Constitutional Structure, and the Welfare State", *American Journal of Sociology*, vol. 99, noviembre, pp. 711-749.
- Huber, Evelyne y John D. Stephens (2001), *Development and Crisis of the Wel-*

- fare State: Parties and Policies in Global Markets*, Chicago, University of Chicago Press.
- Hunter, Wendy y David Brown (2000), "World Bank Directives, Domestic Interests, and the Politics of Human Capital Investment in Latin America", *Comparative Political Studies*, vol. 33, febrero, pp. 113-143.
- Katzenstein, Peter J. (1985), *Small States in World Markets: Industrial Policy in Europe*, Ithaca, NY, Cornell University Press.
- Kaufman, Robert R. y Alex Segura-Ubiergo (2001), "Globalization, Domestic Politics, and Social Spending in Latin America", *World Politics*, vol. 53, núm. 4, julio, pp. 553-588.
- Kay, Stephen J. (1999), "Unexpected Privatizations", *Comparative Politics*, vol. 31, núm. 4, julio, pp. 403-423.
- Kornai, János, Stephan Haggard y Robert R. Kaufman (eds.) (2001), *Reforming the State: Fiscal and Welfare Reform in Post-Socialist Countries*, Nueva York, Cambridge University Press.
- Madrid, Raúl (2003), *Retiring the State: The Politics of Pension Privatization in Latin America and Beyond*, Stanford, Stanford University Press.
- Marshall, T.H. (1950), *Citizenship and Social Class, and other Essays*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Marshall, Monty G. y Keith Jagggers (2000), *Polity IV Project: Political Regime Characteristics and Transitions, 1800-1999* [archivo de computadora], College Park, MD, Center for International Development and Conflict Management, University of Maryland.
- Mosley, Layna (2000), "Room to Move: International Financial Markets and National Welfare States", *International Organization*, vol. 54, núm. 4, pp. 737-773.
- Nelson, Joan M. (ed.) (1990), *Economic Crisis and Policy Choice: The Politics of Adjustment in the Third World*, Princeton, Princeton University Press.
- (1999), *Reforming Health and Education: The World Bank, The IDB, and Complex Institutional Change*, Policy Essay 26, Washington, Overseas Development Council.
- Orenstein, Mitchell (s.f.), *How Politics and Institutions Affect Pension Reform*

- in Three Postcommunist Countries*, World Bank Policy Research Working Paper, Washington, World Bank.
- Pagter Kristensen, Ida y Gregory Wawro (2003), "Lagging the Dog? The Robustness of Panel Corrected Standard Errors in the Presence of Serial Correlation and Observation Specific Effects", Summer Meeting of the Society for Political Methodology, University of Minnesota.
- Remmer, Karen L. (1989), *Military Rule in Latin America*, Winchester, Massachusetts, Unwin Hyman.
- Rodrik, Dani (1997), *Has Globalization Gone Too Far?*, Washington, Institute for International Economics.
- (1998), "Why do More Open Economies have Bigger Governments?", *Journal of Political Economy*, vol. 106, núm. 5, pp. 997-1032.
- (1999), *Making Openness Work: The New Global Economy and the Developing Countries*, Washington, Overseas Development Council.
- Rudra, Nita (2002), "Globalization and the Decline of the Welfare State in Less-Developed Countries", *International Organization*, vol. 56, núm. 2, primavera, pp. 411-445.
- Rudra, Nita y Stephan Haggard (2001), "Globalization, Domestic Politics, and Welfare Spending in the Developing World", Annual Meeting of the American Political Science Association, San Francisco, CA, 30 de agosto a 2 de septiembre.
- Stephens, John (1979), *The Transition from Capitalism to Socialism*, Londres, Macmillan.
- Stimson, James A. (1985), "Regression in Space and Time: A Statistical Essay", *American Journal of Political Science*, vol. 29, pp. 914-947.
- Strange, Susan (1996), *The Retreat of the State: The Diffusion of Power in the World Economy*, Nueva York, Cambridge University Press.
- Swank, Duane (2002), *Global Capital, Political Institutions, and Policy Change in Developed Welfare States*, Cambridge, Cambridge University Press.
- (2003), "Withering Welfare? Globalization, Political Economic Institutions, and the Foundations of Contemporary Welfare States", en Linda Weiss (ed.), *States and Global Markets: Bringing Domestic Institutions Back*, Cambridge, Cambridge University Press.

- Teichman, Judith (2001), *The Politics of Freeing Markets in Latin America: Chile, Argentina, and Mexico*, Chapel Hill, University of North Carolina Press.
- (2004), “The World Bank and Policy Reform in Mexico and Argentina”, *Latin American Politics and Society*, vol. 46, núm. 1, primavera, pp. 39-74.
- Weiss, Linda (ed.) (2003), *States and Global Markets: Bringing Domestic Institutions Back*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Williamson, John (2000) [1990], “What Washington Means by Policy Reform”, en Jeffry Frieden, Manuel Pastor, Jr. y Michael Tomz (eds.), *Modern Political Economy and Latin America: Theory and Policy*, Boulder, CO, Westview Press, pp. 18-23.
- Williamson, John B. y J. J. Fleming (1977), “Convergence Theory and the Social Welfare Sector: A Cross-National Analysis”, *International Journal of Comparative Sociology*, vol. 18, pp. 242-253.

APÉNDICE DE REGRESIÓN. MODELOS COMPLETOS
CON EFECTOS FIJOS

	<i>Educación</i>	<i>Salud</i>	<i>Protección social</i>
Variable dependiente $t-1$	0.570*** (0.054)	0.546*** (0.068)	0.805*** (0.047)
Democracia $t-1$	0.247* (0.149)	0.308** (0.138)	0.652 (0.400)
Flujos de capital $t-1$	0.004 (0.073)	0.087 (0.118)	0.166 (0.158)
Comercio $t-1$	-0.327 (0.234)	0.028 (0.166)	-0.565 (0.364)
IED neta $t-1$	0.820 (2.062)	0.668 (1.929)	12.175** (4.874)
Democracia × flujos de capital $t-1$	-0.440 (0.296)	0.091 (0.560)	0.664 (0.556)
Democracia × comercio $t-1$	-0.300 (0.261)	-0.270* (0.160)	-0.754 (0.629)
Democracia × IED neta $t-1$	0.411 (2.576)	2.229 (2.349)	-14.109** (6.480)
Log PIB per cápita $t-1$	0.009 (0.032)	-0.007 (0.014)	0.046 (0.072)
Crecimiento del PIB $t-1$	-0.297 (0.395)	0.417 (0.368)	-0.997 (0.893)
Ayuda al desarrollo $t-1$	0.854 (1.608)	0.990 (1.219)	3.878 (3.214)
Servicio de la deuda $t-1$	0.038 (0.234)	0.055 (0.180)	-0.369 (0.602)
Población menor de 14 años $t-1$	-309.95*** (119.739)		
Tasa de dependencia $t-1$		-32.228 (23.282)	
Población mayor de 65 años $t-1$			23.661* (13.250)
Observaciones	450	451	454
R^2	0.937	0.959	0.975

* $p < 0.1$.

** $p < 0.05$.

*** $p < 0.01$ en prueba de dos colas. Los errores estándar robustos entre paréntesis con efectos de país fijos.

APÉNDICE DE DATOS

País	PIB per cápita (1995 US \$) media	PIB per cápita (1995 US \$) s.d.	Años de demo- cracia (1980- 1999)	Educación			Salud			Protección social		
				Núm. de obs.	Gasto promedio (% del PIB)	Error absoluto promedio (%)	Núm. de obs.	Gasto promedio (% del PIB)	Error absoluto promedio (%)	Núm. de obs.	Gasto promedio (% del PIB)	Error absoluto promedio (%)
Albania	832	122					3	1.2	11.1	3	7.0	3.4
Argentina	7 166	666	1983-1999	18	0.9	32.4	16	0.3	22.4	19	6.0	10.3
Belarús	2 567	394	1991-1994	6	1.8	36.5	6	1.3	31.6	6	11.3	6.4
Bolivia	916	88	1982-1999	13	3.7	3.4	13	1.0	2.8	13	3.6	5.6
Brasil	4 109	292	1985-1999	15	1.1	9.5	15	1.8	9.5	15	7.9	8.2
Bulgaria	1 530	162	1990-1999	9	1.6	1.1	9	1.5	0.3	9	11.7	2.4
Chile	3 272	1 055	1989-1999	19	3.5	0.6	19	2.2	0.6	19	9.1	2.5
Colombia	2 027	253	1980-1999	13	3.1	4.1	13	1.1	0.3	13	1.8	9.8
Corea	7 774	2 864	1998-1999	17	3.1	6.4	17	0.2	45.1	17	1.3	25.1
Costa Rica	3 089	353	1980-1999	19	4.0	0.2	19	4.9	2.6	19	3.2	5.6
Croacia	3 671	509		5	3.0	4.0	5	6.6	9.7	5	15.8	8.7
Egipto	880	177		16	4.6	2.8	16	1.0	1.2	16	4.0	9.1
Estonia	4 029	552		7	3.2	4.5	7	5.5	11.1	7	10.2	1.3
Federación Rusa	3 026	551		2	0.5	59.3	2	0.4	31.4	2	7.8	13.0
Guyana	726	111		5	6.8	4.2	5	4.1	1.2	5	2.8	27.9
Hungría	4 442	413	1990-1999	9	3.8	6.9	9	2.4	12.0	9	16.9	3.2
Irán	1 529	268		17	4.2	3.2	17	1.6	1.9	17	3.0	9.4
Jamaica	1 699	123	1980-1999	6	4.9	16.0	6	2.4	4.5	6	0.6	32.3
Kazakstán	1 677	393		2	0.8	37.6	2	0.9	64.9	2	7.2	13.9

Letonia	2 737	573	1991-1999	5	2.7	18.6	5	3.1	14.4	5	14.1	9.3
Lituania	2 226	453	1991-1999	6	1.7	0.5	6	3.0	19.1	6	9.4	4.6
Malacia	3 042	948		10	5.2	2.5	10	1.4	24.5	6	1.4	22.9
Marruecos	1 210	126		17	5.4	4.5	17	0.9	4.3	17	2.0	5.6
Mauricio	2 667	796	1980-1999	19	3.6	1.1	19	1.9	5.4	19	4.0	3.5
México	3 180	251		19	3.2	3.7	19	0.4	2.1	19	2.7	2.4
Panamá	2 815	238	1989-1999	19	4.6	9.0	19	4.9	6.5	19	4.7	123.5
Paraguay	1 740	161	1992-1997, 1999	11	1.5	1.9	11	0.5	3.5	11	2.4	7.1
Polonia	2 881	403	1991-1999	5	2.5	16.4	5	3.4	20.0	5	19.2	1.6
República Dominicana	1 425	177	1996-1999	19	1.8	3.9	19	1.6	0.4	19	0.8	8.3
República Eslovaca	3 745	357	1993-1999	3	4.1	1.2	3	7.2	3.4	3	12.5	0.8
Rumania	1 504	208	1996-1999	9	3.3	14.1	9	2.9	10.3	9	9.7	0.8
Siria	1 053	97		14	2.3	10.3	14	0.5	5.1	14	0.9	10.2
Sri Lanka	560	131		17	2.7	6.3	17	1.5	6.9	17	3.8	3.4
Sudáfrica	4 198	294	1993-1999	2	1.6	5.3	2	0.1	153.1	2	1.0	9.4
Tailandia	1 773	727	1992-1999	19	3.6	1.7	19	1.2	1.0	19	0.6	19.4
Trinidad y Tobago	4 330	438	1980-1999	3	3.6	1.2	3	2.0	7.1	3	3.5	1.8
Túnez	1 799	262		19	5.6	4.0	19	2.2	1.3	19	4.5	6.0
Turquía	2 424	397	1983-1999	17	3.1	3.5	17	0.7	5.6	17	0.9	20.8
Uruguay	5 069	686	1985-1999	19	1.9	1.1	19	1.3	5.6	19	15.1	4.2
Media de la muestra	2 701	438			3.1	9.0		2.1	14.5		6.3	11.9

Notas: Los datos para Belarús, Bolivia, Letonia, Lituania, Polonia, República Eslovaca y Sudáfrica sólo incluyen años democráticos.
Los datos para Corea sólo incluyen años autoritarios.